

una alianza, el aporte será determinado en función de los votos obtenidos por la misma, distribuyéndose entre los partidos integrantes en proporción a los afiliados certificados por la justicia electoral en el distrito que se considere a la fecha de la constitución de la alianza, salvo que esos partidos hayan convenido una forma distinta de distribución.

En oportunidad de dictarse la disposición administrativa de distribución de los créditos de la presente ley, el jefe de Gabinete de Ministros efectuará la adecuación correspondiente.

—Votado por unanimidad.

Artículo... Incrementase en catorce millones de pesos (\$ 14.000.000) el crédito fijado en el artículo 1° de la presente ley a la Jurisdicción 35 —Programa 16— Acciones Diplomáticas de Política Exterior, con destino a la Comisión Nacional para el Límite de la Plataforma Continental (COPLA).

A los fines del cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, el jefe de Gabinete de Ministros procederá a efectuar las compensaciones necesarias con las partidas de Servicios No Personales establecidas en la presente ley.

—Votado por unanimidad.

Artículo ... Ratifícase el decreto del Poder Ejecutivo nacional 313 de fecha 6 de abril de 1999, en lo que es materia de competencia del Congreso Nacional, autorizando al jefe de Gabinete de Ministros a reasignar partidas presupuestarias para su cumplimiento.

—Votado por dos tercios.

Artículo ... Incrementase el presupuesto correspondiente a la Jurisdicción 01, Programa 18,

en la suma de dos millones de pesos (\$ 2.000.000).

Los presidentes de las Cámaras de Senadores y de Diputados dispondrán las reestructuraciones de los presupuestos en el ámbito de sus respectivas competencias, con el fin de transferir los créditos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, por partes iguales, no pudiendo afectarse las partidas de remuneraciones.

—Votado por unanimidad.

Se deja constancia del que en la sanción definitiva deberían reubicarse los artículos conforme a los títulos y adecuar las numeraciones o remisiones que pudieran corresponder.

Saludo a usted muy atentamente.

Oscar Lamberto. — Juan C. Pezoa. — Ana M. Mosso. — Lorenzo Domínguez. — Orlando Aguirre. — Raúl Álvarez Echagüe. — Eduardo Camaño. — Esteban Dómina. — Cristina Fernández de Kirchner. — Sara Liponezky de Amavet. — Marcelo López Arias. — María Mosello de Benzo. — Norberto Nicotra. — Jorge Remes Lenicov. — Fernando Salim. — Juan C. Suárez. — Juan C. Veramendi. — Mariano Viaña.

En disidencia parcial:

Darío Alessandro. — Emilio Carrara. — José Castillo. — Roberto De Bariazarra. — José Dumont. — Mario Fadel. — Rubén Giustiniani. — Cristina Guevara. — Juan C. Passo. — Horacio Pernasetti. — Rodolfo Rodil. — Héctor Romero. — Eduardo Santín. — Rodolfo Terragno. — Silvia Vázquez. — Raúl Vicchi.

En disidencia total:

Carlos Balter.

II INSERCIONES

1

Solicitada por el señor senador Ulloa

Señor presidente:

Se trata de un presupuesto de necesidad y urgencia, por las condiciones de conflictividad social, y dificultades económicas y financieras que vive la Argentina.

A modo de introducción es bueno recordar, aunque sea brevemente, algunos temas que condicionan el funcionamiento de nuestra economía y que, quizás no por remanidas, hay que dejarlas de lado en este debate.

Entre 1990 y 1997 hubo una masiva venta de empresas del Estado, en su mayoría deficitarias, lo que produjo una importante cantidad de recursos, estimándose el monto recaudado entre efectivo y títulos recibidos en aproximadamente 45 mil millones de dólares.

No obstante ello la deuda externa solamente del Estado nacional trepó de 60.000 millones desde la vigencia de la convertibilidad a más de 120 mil millones, pasando de representar 29 puntos a 43 puntos del PBI.

Los intereses de la deuda crecieron de 2.000 millones a más de 10.000 millones que se pagarán este año.

Las cuentas públicas están muy mal, el déficit del año pasado fue de más de 7.500 millones y este año pese a la estimación inicial de que estaría en el orden de los 4.500 millones cerraremos el año con más de 6.000 millones.

Las economías normales pueden recurrir al financiamiento monetario en los mercados locales o internacionales cuando sus cuentas son deficitarias, las emer-

gentes como la nuestra cada vez tienen más dificultad para conseguir recursos que tapen los baches fiscales. He aquí la razón por la cuales dije al comienzo que éste es un presupuesto de necesidad y urgencia.

La urgencia está dada básicamente por el corte del financiamiento del déficit con más endeudamiento en los mercados del mundo.

En los debates de las leyes de presupuestos anteriores vine advirtiendo sobre el peligroso círculo vicioso, déficit, endeudamiento, aumento de los intereses, del riesgo país, tasas más altas, nuevos déficit y así sucesivamente.

Tenemos en discusión una ley de presupuesto que muy poco tiene que ver con su versión original de 73 artículos. Hoy son 117, admitiendo que la modificación a la Ley de Convertibilidad Fiscal ocupa algunos artículos nuevos.

Pero más allá de este tema, que lo toco solo por lo anecdótico, y además porque demuestra que hubo discusiones en torno a esta media sanción de Diputados, hay cambios sustanciales.

En primer lugar hay una hipótesis de crecimiento menor de la economía. De 4 % del PBI se disminuyó a 2,5 %, lo que impacta negativamente en los recursos que entre el proyecto original y el aprobado disminuyen en 1.512,4 millones, mientras que los gastos se incrementan en 569.5 millones, con lo que el nuevo déficit fiscal está en el orden de los 6.500 millones.

Esto obligó a modificar la ley de solvencia fiscal de modo tal que las metas originarias de control del déficit han sido cambiadas lo que en realidad no constituye un buen síntoma en cuanto al manejo de las cuentas públicas.

Debemos admitir que esta ley se sancionó demasiado tarde. Posiblemente de haberse dispuesto medidas de esta naturaleza hace 6 o 7 años, el gasto público no hubiera crecido a una tasa más alta que la creció el PBI, generando esta explosiva situación de las finanzas del Estado.

Señor presidente: el proyecto que estamos tratando, tal cual lo manifesté anteriormente, ha sufrido una serie de modificaciones en la Cámara de Diputados. Entre ellas hay un importante aumento de los planes sociales en 325 millones, la eliminación de las disposiciones que contenían recortes al Fondo Especial del Tabaco y a los beneficios de las provincias patagónicas por subsidios al consumo de gas. También se eliminaron los recortes presupuestarios a las universidades, que afectaban a la universidad nacional de mi provincia, Salta, temas todos ellos que los comparto total y absolutamente.

Todavía quedan temas para resolver, como es la eliminación de impuestos distorsivos, sobre los que hay un avance, como la rebaja del impuesto a los intereses, y la extensión de cuatro a diez años en el impuesto a la ganancia mínima presunta para el cómputo de pago a cuenta en ganancias.

No obstante, es bueno aclarar que estos dos impuestos a la renta mínima presunta estimados en 600 millones e intereses en 900 millones representan 3% de los ingresos totales por lo que parece razonable

buscar otras fuentes de financiamiento, o en su defecto si la economía crece más de lo previsto, que se deroguen en el transcurso del año. Estas nuevas fuentes de financiamiento podrían lograrse a través de un blanqueo de capitales que, a la vez de mejorar los recursos presentes y futuros, aumenten la disponibilidad de capitales para destinarlos a la inversión productiva.

Paralelamente las últimas moratorias y planes de facilidades de pago deberían ser reconvertidas con mayores beneficios para los contribuyentes de manera de reducir los intereses y evitar que en las primeras cuotas se queden en el camino. Esta medida también ocasionaría aumento de recursos.

No quiero dejar de mencionar la importancia que tiene el compromiso fiscal firmado recientemente con los gobernadores para acotar el gasto primario de las provincias. Sinceramente estoy convencido de que de haberse asumido la responsabilidad de acotar el gasto nacional y el de las provincias en los últimos cinco años, hoy Argentina no sufriría las angustias financieras que tiene y la crisis social traducida en los fenómenos de pobreza, marginalidad y desocupación estaríamos en vías de superarla.

Ahora bien, me parece que no puedo dejar pasar este debate sin señalar que, no bien asumido este gobierno, el Congreso de la Nación fue acompañando medidas de distinto tipo en el convencimiento pleno de que el camino era el correcto.

Era delicada la situación fiscal, era alta la desocupación, la Argentina tenía problemas de competitividad, había crecido la pobreza, las economías regionales estaban en crisis, el país sufría una profunda recesión y las expectativas de la gente para salir adelante eran notables.

A esta altura de los tiempos, ha pasado un año, la situación fiscal sigue grave, la desocupación es altísima, seguimos teniendo problemas de competitividad, las economías regionales sufren, la marginalidad y la pobreza aumentan, la recesión no se fue y las angustias de la gente crecen día a día. Basta caminar nuestro interior, el interior de mi provincia, donde los problemas sociales y fundamentalmente la falta de expectativas alentadoras especialmente para nuestros jóvenes es sorprendente.

¿Que nos pasa? ¿Qué está pasando en la Argentina que no podemos salir adelante? ¿Cuáles son los condicionamientos que tenemos para crecer a un ritmo que permita bajar la desocupación para reducir la pobreza y la marginalidad?

Escucho y leo opiniones de economistas y funcionarios y la verdad que cada día entiendo menos. Unos dicen que nuestro problema es la Ley de Convertibilidad, que hay que abandonarla, cosa que considero imprudente, otros que hay que dolarizar la economía. Primero era necesario bajar el déficit fiscal aumentando impuestos y reduciendo gastos para generar confianza, bajar la tasa de interés a fin de alentar la inversión para que el país crezca. Esta receta parece que no funcionó: más impuestos no generaron menor déficit, al contrario el déficit aumentó. Ahora se dice que el blindaje financiero nos

permitirá no hacer mayores ajustes el próximo año. Más aún se habla de una reforma previsional cuyos efectos para las cuentas públicas se verán en el mediano y corto plazo. Me pregunto: ¿Cuál será el efecto en los futuros jubilados? La gran duda. Ahora bien el blindaje financiero es importante pero si no nos renuevan los créditos se agota en un año. ¿Y el 2002 qué? La Argentina debe colocar entre 28 y 30 mil millones de deuda para refinanciar vencimientos, pagar intereses y atender el déficit el próximo año. Todas estas incógnitas me confunden, y no debo ser el único, como yo muchos millones de argentinos, no entienden qué nos pasa.

La macroeconomía hay que cuidarla, hay que seguir de cerca los indicadores, especialmente los que se han escapado, deuda, déficit, intereses, inversión, consumo, exportaciones, etcétera, para analizar el pulso del país, pero yo vivo el pulso de la gente, la que me para en la calle y me dice senador, cuándo arrancarnos, no tengo trabajo, no puedo mandar mis hijos a la escuela, no tengo acceso a la salud pública, faltan remedios en los hospitales públicos, necesito asistencia del Estado.

Sinceramente mi voto afirmativo al presupuesto, es un voto de esperanza, de que arranquemos, de que cuando una madre me pare en la calle me diga ya puedo mandar mis hijos a la escuela, el hospital tiene remedios, escuchar que el trabajador del norte de Salta ha vuelto a las fincas, que el agricultor toma créditos porque su producción es rentable, que la situación en el departamento de San Martín de mi provincia, como en los de tantos otros lugares del país se ha normalizado. Es entonces un voto de confianza hacia el Poder Ejecutivo, para que definitivamente encuentre el rumbo, en el convencimiento pleno de que andando bien el gobierno nacional, los gobiernos de provincia y los municipales, la gente va a estar bien. Si esto es así, si el país inicia un camino de crecimiento, el esfuerzo de aprobar este presupuesto a las apuradas y sin mucho tiempo para el análisis después de tantas modificaciones en Diputados estará justificado.

2

Solicitada por el señor senador Villaverde

Señor presidente:

Este proyecto llegó al despacho el lunes a última hora de la noche y no hubo, en consecuencia, el tiempo mínimo necesario para analizarlo como corresponde, razón por la cual una discusión en estas condiciones significa tratarlo virtualmente "a libro cerrado".

Por este motivo, me voy a limitar a formular algunas consideraciones de orden general en relación al presupuesto y luego haré un análisis específico del área defensa.

El problema de fondo del presupuesto 2001 no es el monto de eventuales recortes de gastos sino la cobertura de necesidades de financiamiento por más de 30.000 millones de dólares.

Estas necesidades de fondos surgen del resultado financiero -artículo 4- donde constan fuentes de financiamiento por 29.000 millones más el agregado -del artículo 70- de otros 3.100 millones: total 32.000 millones de pesos.

La planilla 14 -anexa al artículo 5- autoriza operaciones de crédito público por 23.000 millones.

A esto hay que agregarle la colocación de Letras del Tesoro a corto plazo por otros 5.000 millones (según el artículo 7).

El hecho que el Congreso autorice necesidades de financiamiento por 32.000 millones de dólares o pesos -equivalente a las 2/3 partes del gasto público total- significa en la práctica que el Poder Ejecutivo quedará facultado para conseguir tales fondos en el mercado de capitales.

Por ende, la aprobación de este presupuesto implica darle una autorización o "cheque en blanco" al gobierno para que arregle como quiera (o como pueda) una renegociación de la deuda pública.

La Presidencia de la Nación estará entonces facultada para convenir el denominado "blindaje financiero" a través del Fondo Monetario Internacional y para acordar un eventual "nuevo Plan Brady" con los acreedores.

El Congreso declinaría así, indebidamente, su función constitucional de intervenir en el arreglo de la deuda pública -según las atribuciones del artículo 75- y la delegaría formalmente al Poder Ejecutivo.

Lo correcto debería ser que la renegociación en curso de la deuda se maneje al revés: primero el Poder Ejecutivo debe informar al Congreso sobre las condiciones del "blindaje" -un híbrido que implicaría dar garantías ejecutables sobre el pago de intereses- para conocer las condiciones de las tratativas en desarrollo con el exterior; segundo, la autorización de dichas condiciones debiera incluirse expresamente en el texto del presupuesto; y tercero, recién entonces se sometería el presupuesto 2001 al debate.

El Congreso que apruebe este proyecto de ley autorizaría prácticamente al Poder Ejecutivo para negociar un "nuevo Plan Brady" por la deuda pública, sin fijarle ningún condicionamiento o en función del interés nacional.

Cabe destacar aquí que el proyecto venido de Diputados aumenta el déficit fiscal para el 2001 de 4.800 millones de pesos, en 2.200 millones más: total 7.000 millones, que serán cubiertos con más deuda pública.

Además, este proyecto modifica una serie de disposiciones de la ley 25.152 de solvencia fiscal (artículos 86 y 87), lo cual no sería correcto porque tales modificaciones debieran hacerse por ley específica aparte.

Igualmente, el proyecto avanza en estas modificaciones invocando los términos del nuevo pacto fiscal con los gobernadores de provincia, que no ha sido ratificado aún por las respectivas Legislaturas.

De la misma manera, el proyecto estaría disponiendo sobre temas de obras públicas de infraestructura -artículo 101 y planilla anexa- que autorizan contrataciones con independencia en ejercicios futuros y referencia a una ley de fondo fiduciario que todavía no tiene la aprobación del Senado.

Por último, cabe señalar que el proyecto de presupuesto 2001 da facultades amplias al jefe de Gabinete sobre la reestructuración organizativa y la

planta de personal de la administración pública —por el capítulo III— lo cual incluye la reducción de haberes del 12%, que fue oportunamente rechazada por el bloque justicialista del Senado cuando el Poder Ejecutivo emitió el decreto 430/00.

Este listado de observaciones y/o comentarios es forzosamente incompleto dada la falta de tiempo para poder hacer un análisis mínimo de los temas más importantes del proyecto de presupuesto.

Hasta aquí, mis consideraciones de orden general sobre el tema presupuesto 2001.

Pero, en mi condición de presidente de la Comisión de Defensa Nacional he elaborado un informe específico a este respecto cuyo objeto es exponer un cuadro de situación y recomendaciones, que paso a explicar a continuación.

Evolución del gasto de defensa

El presupuesto para los servicios de defensa y seguridad en el ejercicio 2001 es de unos 3.300 millones, que representan el 6,4% del gasto público total (que es de 51.230 millones).

Dentro de este monto, el gasto de defensa propiamente dicho es 1.855 millones, que constituye así el 3,6% del gasto del Estado.

Este importe para el 2001 es 27 millones más bajo que el presupuesto del corriente año, que fue autorizado por 1.882 millones (un recorte del 1,4%).

A su vez, el total de gastos de defensa del 2000 es 150 millones menor que el 99: una reducción del 7,4% sobre los 2.033 millones de ese año.

Esto significa que las fuerzas armadas han tenido una reducción de gastos del 9% acumulado en el último bienio.

A los problemas económicos derivados de la continuada reducción de partidas presupuestarias en las tres armas habría que agregarles, además algunos graves y recurrentes problemas financieros que les son comunes, particularmente la subejecución presupuestaria, la transferencia consiguiente de parte de esos gastos pendientes de un ejercicio al otro y el sobrecosto consiguiente en las condiciones de pago resultantes del actual cuadro de situación del Estado.

No se computan aquí los pagos por retiros militares —que son del orden de los 1.150 millones— porque estos gastos están dentro de la función de seguridad social.

Gastos y metodología presupuestaria

Se ha dicho antes que el monto oficial de los gastos de defensa es de poco más de 1.850 millones para el año 2001.

Pero los gastos totales de las fuerzas armadas, en realidad, son superiores a los que aparecen en el presupuesto por finalidad ya que en la función defensa no se cargan una serie de programas de tipo social que son sostenidos por otras jurisdicciones del Estado.

Para el ejercicio 2001 tales programas suman 500 millones, que corresponden a dos rubros comunes a las tres armas: formación/capacitación por 265 millones y sanidad por 130 millones; y otros dos programas que son específicos de la Fuerza Aérea:

transporte de fomento por 6 millones (fundamentalmente LADE) y apoyo a la actividad aérea nacional por 87 millones (controles de aeronavegación y aeropuertos).

El total de gastos para la Jurisdicción 45 —Ministerio de Defensa— llega así a 2.355 millones en el año 2001 (1.855 millones de gastos de defensa más los 500 de programas especiales).

Si a este monto se le agregan ahora los retiros militares, el total general del área Ministerio de Defensa llega a poco más de 3.500 millones (los 2.355 millones citados más los 1.150 millones del IAF).

Se hace esta aclaración porque así se computan en la composición del gasto público por jurisdicción y fuente de financiamiento y así corresponde también según la metodología de cálculo internacional.

Distribución de gastos por arma

Volviendo ahora a las erogaciones por concepto de defensa, tenemos que los 1.855 millones de la función defensa para el año 2001 —según su finalidad— corresponden a los siguientes rubros:

1.700 millones a capacidad operacional de las fuerzas armadas: 710 millones; Ejército (EA), 540 millones Armada (ARA) y 450 millones Fuerza Aérea (FA);

106 millones a conducción política de Defensa nacional (son los gastos propios del ministerio);

33 millones a planeamiento militar conjunto y fuerzas de paz;

13 millones a desarrollo tecnológico para la defensa (CITEFA); y

6 millones al Servicio de Hidrografía Naval.

Comparando presupuesto del 2001 contra presupuesto del año en curso se observa una reducción de 40 millones en la capacidad operacional de la fuerza EA y una leve suba para las de ARA (4 millones) y FA (7 millones), y también para el EMC y fuerzas de paz (otros 10 millones).

Capacidad operacional de las fuerzas armadas

La capacidad operacional es la suma de cuatro conceptos o incisos principales: gastos en personal, bienes de consumo, servicios no personales y bienes de uso; a los que se agregan también, según el caso, transferencias y activos financieros.

Los gastos en personal —inciso 1— son 1.820 millones sobre el total de los 2.355 millones del Ministerio de Defensa (el 77%).

Las reducciones que se producen en el nuevo ejercicio sobre tales gastos en personal corresponden básicamente a la reducción del 12% sobre los haberes del personal militar en actividad y en retiro, que fueron establecidos por el decreto 430/00 y cuya vigencia se extiende ahora a todo el año 2001.

El resto de las erogaciones —descontando los gastos del ministerio— constituyen los gastos de funcionamiento, que son las erogaciones concretas dedicadas a la actividad operativa específica de las fuerzas armadas.

Para el 2001 estos gastos de funcionamiento —también denominados gastos e inversiones— serán de 430 millones: 150 millones para EA, 100 para ARA y 180 para FA.

Dentro de este importe sólo 50 millones corresponden a bienes de uso, que es el rubro del gasto corriente que identifica el reequipamiento militar.

Aquí no está incluido el repotenciamiento de los A4-AR (36 aparatos, que ya fueron entregados) porque su costo se sufra en forma directa a nivel ministerio.

Las metas físicas previstas de las fuerzas armadas en el 2001 son las mismas que para el ejercicio en curso, salvo en lo tocante al aumento en las horas de vuelo de la Fuerza Aérea, que pasan de 51.014 a 59.380, esto es, un incremento del 16,4%.

Sin embargo, cabe observar que se aumentan las horas de vuelo pero no se estarían aumentando, a la par, las partidas de gastos adicionales correspondientes por mayores costos de adiestramiento del personal y servicios de mantenimiento.

Las cifras del ejercicio 2001 estarían así en línea con la política general de reducción de gasto público y también con ciertos aspectos de la política de modernización del sistema de defensa nacional, en cuanto a lograr un incremento de la capacidad operacional de las fuerzas sin contar con recursos adicionales, sino aumentando la eficiencia y calidad del gasto.

Pero en la práctica, según surge del panorama que se tiene de cada una de las armas, gran parte de esta reducción forzada del gasto va precisamente en contra de los resultados buscados.

En efecto, se sabe que continuamente las tres fuerzas sufren una insuficiencia de recursos tan grave que no existe ninguna garantía de que la reducción de partidas lleve a una verdadera racionalización u optimización del gasto militar sino que, por el contrario, la sistemática escasez de medios está forzando a gastar mal por razones financieras, y también a perder oportunidades y mejoras en las condiciones de compra para atender los gastos de funcionamiento.

Si bien son muy positivos los avances en curso para el nuevo régimen funcional del EMC y el planeamiento estratégico militar, así como la próxima implementación del sistema unificado de compras dentro del Comando Logístico Conjunto, es previsible que tales reformas no produzcan efectos relevantes en el corto plazo.

De hecho, la implementación o puesta en marcha de este nuevo sistema en caso de ser aprobado se verificaría durante el año que viene, aunque sus metas son significativas en función de las cifras actuales: tomando como base un total promedio de gastos de funcionamiento de unos 350 millones anuales —incisos 2, 3 y 4— la idea sería lograr la reducción de estas erogaciones en un 20% —aproximadamente 70 millones por año— debido a la disminución de actuales sobrecostos de compra.

Pero, aceptando que el nuevo sistema logre los resultados previstos aparte del desfase natural en los tiempos de respuesta por la implementación existente —además el problema que el bajo nivel presente

de gastos e inversiones hace que la necesidad de erogaciones en estos rubros se acumule y tenga entonces una tendencia creciente, lo que supone afrontar niveles de gastos más elevados en el futuro.

Por otra parte, el manejo centralizado y más eficiente de los recursos de compra y mantenimiento no puede dar solución significativa al problema de la falta de fondos para la inversión en nuevas unidades y equipos para la defensa, que son gastos que dependen de partidas mayores que se autoricen por el presupuesto y que hoy, obviamente, no existen.

Dicho en otros términos: es dudoso que puedan cumplirse con eficiencia los objetivos de política presupuestaria para modernización y reestructuración de las Fuerzas Armadas bajo un régimen de duras restricciones de gasto y falta de fondos para la inversión en el reequipamiento.

Sistema de defensa

El decreto 17/00, del 6-1-2000, creó la Comisión para la Modernización del Estado, cuyo titular es el vicepresidente de la Nación.

Dentro de este proceso hay tres proyectos o programas específicos para el rediseño organizacional del área de defensa durante el ejercicio 2001:

1. El proyecto de obtención de medios para la defensa, por el que se crea el Comando Logístico Conjunto, bajo dependencia del EMC, con el objeto de centralizar y unificar los servicios de compras, mantenimiento y otras prestaciones conexas para todas las armas;
2. El programa de reforma de Ciencia y Tecnología, para reorganizar las tareas de investigación y desarrollo, ampliar la base científico-tecnológica a nivel nacional y compatibilizar las necesidades de las Fuerzas Armadas a través de la planificación centralizada; y
3. El conjunto de proyectos para la reforma administrativa, que comprende la integración de redes informáticas, la centralización y racionalización administrativa, la modernización del sistema de defensa nacional para aumentar la capacidad operacional de las fuerzas armadas, el nuevo régimen funcional del EMC, el aprovechamiento de espacios físicos que incluye la centralización de los Estados Mayores de las tres armas en el edificio Libertador y el programa de venta de inmuebles innecesarios.

Asimismo, está en estudio el desarrollo de un nuevo sistema previsional para los retiros y pensiones militares, que funcionaría por reparto y capitalización.

De la lectura del presupuesto, sin embargo, no surge claramente cuánto es la incidencia o desagregado de los gastos relacionados con la implementación de todos estos nuevos programas y proyectos.

Reestructuración de las fuerzas armadas

El Poder Ejecutivo, como es sabido, no está cumpliendo con los términos de la ley 24.948 —de reestructuración de las fuerzas armadas— y no existe perspectiva cierta de que pueda darle cumplimiento en el próximo trienio.

Como agravante, la idea de desafectación y venta de inmuebles militares para asignar su producido al recupero de los ciclos logísticos y/o al reequipamiento de cada una de las fuerzas tampoco cerraría —en monto de recursos ni en oportunidad de tiempos de respuesta— con las necesidades de fondos para desarrollar eficientemente otras alternativas de financiamiento para la reestructuración prevista.

Como regla general, todo proceso de transformación organizativa supone siempre un aumento inicial de los gastos para lograr dichos cambios y, por lo tanto, la consiguiente necesidad de disposición de recursos.

Pero en el caso de las fuerzas armadas existe un doble y grave problema a este respecto, porque, por un lado, la reformulación del sistema de defensa requiere una serie de inversiones preliminares y, por otro, las tres armas vienen sufriendo un prolongado período de restricción de gastos y desinversión, lo que hace más costosa toda previsión de reactivación del área de la defensa.

La conclusión irrecusable que surge de lo dicho es que el Poder Ejecutivo nacional tal como pasó para el ejercicio en curso no cumple ni presenta previsiones de cumplimiento de la ley 24.948.

Financiación del reequipamiento

La cuestión de fondo del gasto militar en este campo está centrada en la forma de financiación a mediano y largo plazo del reequipamiento de las fuerzas armadas.

El problema de desinversión y baja continuada en los gastos de funcionamiento, que afectan directamente a las fuerzas armadas argentinas desde hace largos años, ha venido acentuando la obsolescencia promedio del equipo y el deterioro acelerado de su vida útil debido a insuficiencias elementales y generalizadas en los gastos de mantenimiento pertinentes.

Como producto de este proceso el ritmo de las necesidades de reposición y modernización que hoy se requiere para poder descontar el atraso relativo en el equipamiento militar va mucho más rápido que la disponibilidad de recursos posibles para sostener el material existente e incorporar nuevos elementos.

Y, como agravante, las partidas presupuestarias destinadas a este fin están en continua reducción.

La resultante de todos estos años de restricciones presupuestarias ha sido así la concentración de los gastos de mantenimiento en pocas unidades relativamente nuevas y el paralelo abandono de la mayoría de las unidades, con la consiguiente disminución de su ciclo de vida útil.

A menos que nuevas unidades —más modernas pero más caras— reemplacen la capacidad operativa perdida después de tan prolongado período de desinversión militar, las fuerzas armadas no podrán mantener ni recuperar los elementos que entran más aceleradamente en desuso, quedando forzadas a un sustancial achicamiento de medios.

En las actuales condiciones político-institucionales es muy difícil pensar que esta situación se revierta a menos que se dé, en algún momento, un real "estado de necesidad"; pero aun así, la forma y oportunidad de la reacción que se produzca no garantiza un cambio de fondo.

En el caso eventual de un mal desempeño frente al supuesto de un conflicto o incidente bélico, las fuerzas armadas argentinas no van a ser excusadas ante la opinión pública por haber padecido todos estos largos años de restricciones presupuestarias que han dañado su capacidad operativa y el adiestramiento profesional de sus miembros; ni van a ser consideradas por este proceso de desinversión sufrido en el período post-Malvinas, acentuado particularmente durante los últimos años.

Recomendaciones

Independientemente de la posición general a ser adoptada sobre el presupuesto para el ejercicio 2001, en lo que hace al área específica de defensa se sintetizan algunas recomendaciones, que derivan de los términos del presente informe y son las que se exponen a continuación:

1. Observar al Poder Ejecutivo nacional —a través de la ley de presupuesto por el incumplimiento de la ley 24.948 de reestructuración de las fuerzas armadas.
2. Objetar la política de reducción sistemática de los gastos de defensa que afectan la capacidad operacional de las tres armas y, en particular, los gastos de funcionamiento de las mismas.
3. Rechazar la aplicación de la rebaja salarial al personal en actividad y retiro de las fuerzas armadas dentro el presupuesto 2001, que incorpora así los términos del decreto 430/00 del Poder Ejecutivo a la ley de presupuesto.
4. Poner en duda la factibilidad de cumplimiento de las metas cuantitativas y la realización de los programas y proyectos enunciados para el área de defensa debido a las restricciones presupuestarias establecidas.
5. Observar el costo físico y económico de las restricciones de los gastos que afectan —por medio del rubro bienes de uso— al mantenimiento de materiales y equipos de las fuerzas, gran parte de los cuales estarían hoy por debajo de sus niveles críticos.
6. Observar la falta de mecanismos de financiamiento a mediano y largo plazo del reequipamiento para la defensa en la Argentina.

Aunque estas observaciones —salvo la del punto 3—, no son nuevas, la inclusión de restricciones presupuestarias adicionales para el ejercicio 2001 y el agravamiento de las condiciones del gasto público estructural en materia de defensa determinan la oportunidad y conveniencia de señalar ahora los puntos enunciados a este respecto.

Nota: todas las cifras están expresadas en millones de pesos o dólares (millones). Y los montos grandes están redondeados en el último dígito.

Jorge A. Villaverde.

Senador Nacional
Partido Justicialista
de la Provincia de Buenos Aires

Solicitada por el señor senador Cafiero

Producción de productos seleccionados

PRODUCTOS	Unidades	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	Variación 99/01	Com.
Automotores / Utilitarios	Unidades	13,872	18,808	21,441	44,121	54,853	47,843	53,203	65,736	61,399	66,844	61,399	66,844	379%		
Poliuret. Propil.	Miles Tns.	85	96	99	119	145	185	181	195	211	184	211	184	264%		
Automotores / Carga y Pasaj.	Unidades	4,853	5,939	10,078	11,249	15,699	10,939	10,410	21,062	22,954	13,892	22,954	13,892	181%		
Automotores / Automóviles	Unidades	61,107	114,113	320,902	269,864	338,305	228,959	269,439	369,499	353,074	224,733	353,074	224,733	177%		
Isopropanol	Ton.	17,300	52,888	46,480	44,031	46,780	46,136	46,394	46,783	51,503	45,012	51,503	45,012	160%		
Sec-Butanol	Ton.	4,200	5,493	5,600	10,250	11,100	10,855	12,142	10,899	9,719	10,480	10,899	9,719	150%		
Pinturas para construcción	Ton.	81,507	87,061	121,658	133,071	141,055	104,580	128,741	144,013	160,899	149,277	160,899	149,277	143%		
Faena aves	Miles aves	149	173	233	256	299	290	281	295	333	344	333	344	130%		
Subproductos oleaginosos	Miles Tns.	7,419	8,081	6,722	8,116	8,905	9,857	10,833	10,951	14,797	19,179	14,797	19,179	118%		
Galletas y bizcochos	Miles Tns.	139	200	250	280	307	282	281	294	291	289	291	289	108%		
Aceites vegetales	Miles Tns.	2,808	3,067	3,100	2,755	3,027	3,735	4,044	4,154	4,867	5,859	4,867	5,859	101%		
Hierro redondo p/ormigón	Ton.	N/D	256,961	341,155	342,811	371,953	342,848	417,808	527,416	533,724	517,789	533,724	517,789	101%		
Cemento portland	Miles Ton.	3,612	4,398	5,051	5,847	6,306	5,477	5,117	6,799	7,062	1,407	7,062	1,407	92%		
Lam. Frio	Miles Tns.	733	873	718	780	1,064	1,170	1,222	1,303	1,323	1,407	1,323	1,407	84%		
Gas natural	Mil. M3	23,018	24,643	25,043	26,682	27,702	30,441	34,650	37,057	38,830	42,414	38,830	42,414	84%		
Neumáticos	Miles Unid.	4,955	4,739	5,627	5,243	7,732	7,174	7,593	8,532	9,518	8,259	9,518	8,259	80%		
Petróleo crudo	Miles M3	28,060	28,440	32,246	34,466	38,733	41,739	45,570	48,403	49,148	48,507	49,148	48,507	80%		
Laminados en Caliente / Planos	Miles Tns.	1,358	1,214	892	1,265	1,631	1,793	2,004	2,148	2,153	2,202	2,153	2,202	81%		
Hilados sintéticos	Tns.	27,978	33,672	32,007	34,870	37,339	35,001	39,382	40,299	41,066	43,203	41,066	43,203	54%		
Urea	Miles Tns.	109	103	86	115	96	114	136	171	136	163	136	163	50%		
Gas Oil	Miles M3	8,667	9,505	10,810	10,810	9,920	9,748	10,966	12,057	12,309	12,727	12,309	12,727	44%		
Etileno	Miles Tns.	226	265	297	285	268	309	324	274	277	305	277	305	35%		
Zinc electrolítico	Ton.	30,713	33,452	34,500	31,069	35,214	35,682	36,697	38,672	39,838	40,135	39,838	40,135	31%		
Negro de humo	Ton.	39,883	42,314	36,367	36,312	42,488	43,404	46,801	63,900	63,259	47,398	63,259	47,398	29%		
Aluminio primario	Miles Tns.	163	166	153	171	173	183	185	187	187	206	187	206	27%		
Fibras sintéticas	Tns.	21,004	23,127	19,143	14,848	15,830	13,558	15,855	29,528	27,964	25,131	27,964	25,131	20%		
Petróleo procesado	Miles M3	26,885	26,714	28,660	28,396	27,194	26,331	27,665	30,312	31,527	32,100	31,527	32,100	19%		
Bebidas espirituosas	Miles Litros	57,201	71,828	74,508	79,190	77,878	67,652	72,440	76,442	73,123	67,392	73,123	67,392	18%		
Harina de trigo	Miles Tns.	3,102	3,134	3,118	3,134	3,292	3,283	3,538	3,640	3,739	3,805	3,739	3,805	16%		
Poliuretano	Miles Tns.	227	256	272	245	271	278	274	258	280	261	280	261	15%		
Laminados en Caliente / Otr. No Planos	Miles Tns.	998	796	851	1,009	1,158	1,154	1,272	1,359	1,352	1,101	1,352	1,101	10%		
Naftas	Miles M3	7,185	7,723	7,911	8,078	8,078	7,364	7,021	7,030	7,634	7,687	7,634	7,687	10%		
Acero crudo	Miles Tns.	3,836	2,972	2,680	2,670	3,274	3,575	4,089	4,157	4,210	3,787	4,210	3,787	4%		
Faena Carne vacuna	Miles cab	N/D	N/D	N/D	10,284	10,267	10,100	10,551	10,788	9,445	10,434	10,788	9,445	1%		
Hierro primario	Miles Tns.	2,968	2,759	1,993	2,140	2,859	2,698	3,388	3,576	3,660	2,974	3,660	2,974	0%		
Pastas para papel	Miles Tns.	739	654	709	751	758	788	839	908	858	731	908	858	-1%		
Cloro	Miles Tns.	180	138	119	96	85	100	130	132	132	155	132	155	-3%		
Lavavropas y secarropas	Miles Unid.	N/D	436	756	801	702	458	624	603	624	413	624	413	-5%		
P.V.C.	Miles Tns.	105	105	91	85	91	105	102	103	105	97	105	97	-7%		
Laminados en Caliente / T. s/ Costura	Miles Tns.	526	561	568	588	606	694	741	755	649	466	755	649	-8%		
Caucho Sint.	Ton.	57,200	49,936	41,789	43,715	48,830	54,254	57,994	55,845	54,005	52,480	54,005	52,480	-5%		
Papel para diarios	Ton.	206,661	198,329	206,331	140,549	140,066	180,114	171,343	145,115	174,568	168,238	174,568	168,238	-19%		
Acido sulfúrico	Miles Tns.	210	235	222	194	192	180	193	187	189	168	189	168	-21%		
Sod. caustica	Miles Tns.	227	201	158	164	161	189	157	148	146	173	148	173	-24%		
Hilados celulósicos	Tns.	2,653	3,252	3,202	3,514	3,879	4,082	4,725	4,089	3,794	2,003	4,089	3,794	-25%		
Máquinas-herramientas	ind 1985=100	138	122	162	143	138	128	141	145	115	94	145	115	-53%		
Fuel Oil	Miles Tns.	4,078	3,727	3,073	3,064	2,748	2,223	1,924	1,770	1,740	1,692	1,740	1,692	-58%		
Tractores	Unidades	8,135	3,735	4,298	3,830	4,529	3,490	5,691	4,931	3,346	1,673	4,931	3,346	-73%		

N/D No disponible

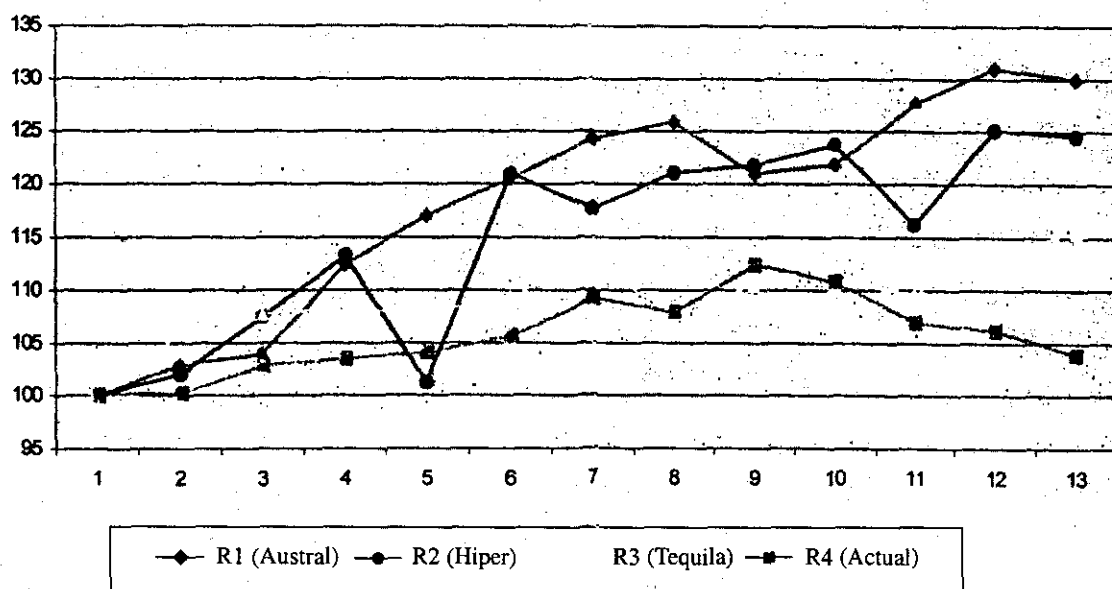
* Variación 99/91; ** Variación 98/90; Variación 99/93

Indicadores de Servicios Públicos

	1995	1996	1997	1998	1999
Energía eléctrica generada (en GWh)	63,797	64,297	69,290	70,780	75,554
Prod. de gas natural (mill. m³)	30,470	34,817	37,205	38,500	42,447
Carga transportada en serv. ferroviario (miles de toneladas)	15,188	16,980	18,902	18,828	17,501
Carga transportada en serv. aéreo (ton.)	137,488	155,904	169,244	182,988	179,120
Pasajeros del serv. aéreo	9,918,255	11,567,048	12,665,493	13,263,823	13,273,106
– Cabotaje	4,879,737	5,904,278	6,587,598	6,921,777	6,916,822
– Internacionales	5,038,518	5,662,770	6,077,895	6,342,046	6,356,284
Pasajeros transporte terrestre	2,254,373	2,294,015	2,238,237	2,195,246	2,127,808
Vehículos pasantes por puestos de peaje	64,392,873	68,036,166	81,469,965	94,320,008	93,006,553

Fuente: INDEC.

Salida de las Recesiones (basado en el IPI)



A efectos ilustrativos, el eje horizontal muestra los meses, a partir del mínimo nivel.

COMPARACION DE DOS DECADAS
PRINCIPALES VARIABLES MACROECONOMICAS
VARIACION PROMEDIO ANUAL (%)

	1981/90	1991/99
PBI	-1.1	4.7
PBI PER CAPITA	-2.4	3.2
CONSUMO	-1	5.2
INVERSION	-7.8	10.8
PRECIOS MINORISTAS*	451.1	10.4
PRODUCTIVIDAD TRABAJO	-2.6	2.6
M3*	-7.5	31.1
M3/PBI	10.4	23.9
DEPOSITOS*	-8.7	32.6
CREDITO AL SECTOR PRIVADO**	-3.8	24.5
RESERVAS INTERNACIONALES**	4.6	22.4
TASA DE DESEMPLEO	5.9	12.5

NOTA:

* diciembre/diciembre

** miles de millones de dólares

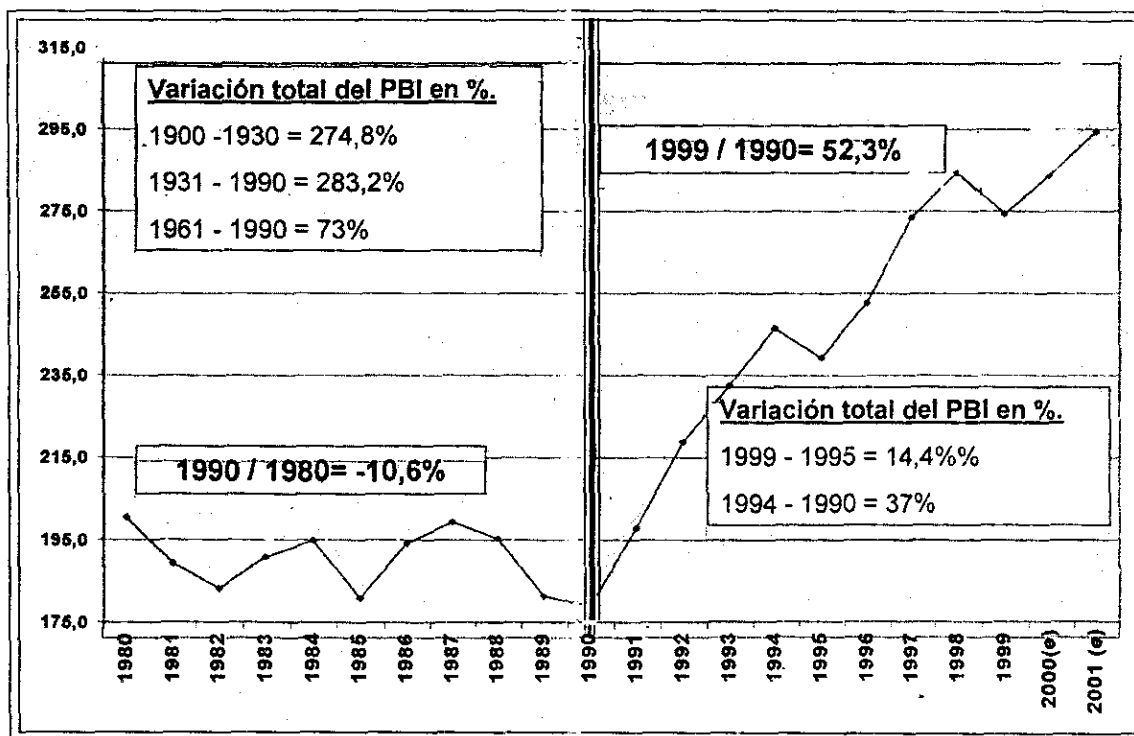
FUENTE MA BRODA Y ASOCIADOS

Producción Industrial
Indices 1990 = 100

Agrupamientos	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Alimentos	100	109.8	120.0	119.5	129.3	135.5	136.0	145.0	149.9	146.0
Bebidas	100	123.5	138.7	140.1	149.0	136.6	137.7	144.4	141.9	130.6
Tabaco	100	104.3	111.4	116.4	119.2	118.5	119.0	120.2	121.9	114.8
Textiles	100	109.6	109.7	94.9	97.7	93.8	100.9	95.8	82.2	66.2
Prendas de vestir, excepto Calzado	100	106.7	129.0	110.7	117.8	103.0	113.5	111.6	110.5	90.5
Productos de Cuero y Calzados	100	121.1	128.9	135.4	147.3	127.3	158.1	169.9	153.4	140.4
Productos de Maderas, Muebles y Colchones	100	117.6	132.9	155.2	158.3	119.6	131.5	205.6	214.4	179.1
Celulosa y Papel	100	117.1	147.6	163.4	171.0	154.9	165.3	178.5	173.2	154.7
Refinación de Petróleo	100	105.5	110.3	111.1	108.9	102.1	103.7	113.5	119.2	121.7
Químico y Petroquímico	100	106.4	117.2	123.5	129.9	126.9	135.4	144.7	150.7	135.5
Productos de Caucho	100	106.0	126.7	128.8	133.6	119.9	112.5	133.7	135.5	102.2
Productos de Plásticos	100	137.1	155.2	178.0	202.7	166.4	207.9	229.4	220.8	176.9
Vidrio y sus productos	100	116.1	131.2	138.9	144.3	130.8	136.1	140.3	131.2	107.8
Materiales de Construcción	100	113.2	131.4	143.0	145.2	123.7	124.4	142.4	143.6	132.6
Metales y sus Fundiciones	100	88.4	85.5	90.1	98.9	104.5	118.6	129.7	131.3	98.4
Productos Metálicos, excepto Maq y Equip	100	113.8	126.5	134.7	136.5	120.1	124.2	124.9	126.9	103.3
Maquinarias y Equipo	100	104.3	119.2	120.9	113.4	105.1	118.5	128.9	131.9	107.0
Materiales de Transporte	100	122.8	197.0	232.6	280.3	196.4	217.0	290.0	309.3	190.8
Total Industria Manufacturera	100	110.2	124.5	128.7	134.6	125.3	133.2	145.7	147.5	127.3

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

La performance de los 90 fue sustancialmente mejor que en los 80. Serie PBI anual



Estructura del Gasto Público Nacional (%)

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Inelástico	34,3	35,9	37,3	38,1	40,2	42,3	43,2
Semielástico	15,9	14,9	14,0	13,6	12,7	11,3	11,6
Elástico	49,8	49,3	48,6	48,2	47,2	46,5	45,2
	100	100	100	100	100	100	100

Nota:

Inelástico: Intereses de la deuda pública, transferencias a provincias y municipios, seguridad social y transferencias al sector privado.

Semielástico: Remuneraciones

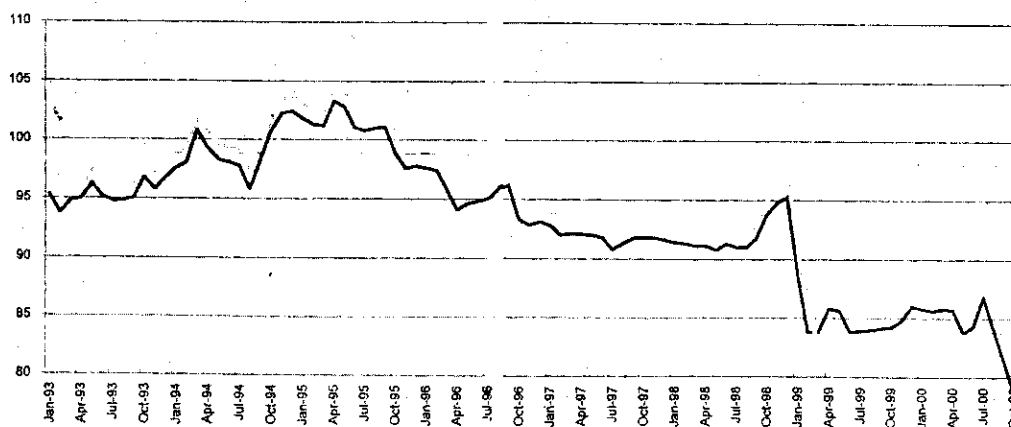
Elástico: Resto

Indicadores del Balance de Pagos

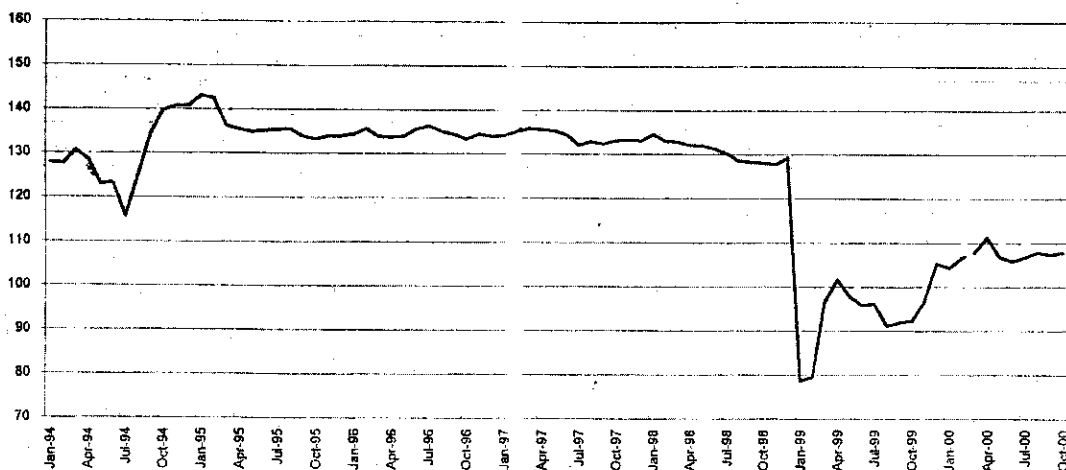
En miles de millones de dólares

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*
Exportaciones de Bienes (FOB)	12,3	11,9	12,2	13,1	15,8	20,2	23,7	26,4	26,4	23,3	26,4
Importaciones de Bienes (CIF)	4,1	8,3	14,9	16,8	21,6	20,1	23,7	30,4	31,4	25,5	28,5
Balance Comercial	8,2	3,6	-2,7	-3,7	-5,8	-0,1	-	-4,0	-5,0	-2,2	-2,1
Saldo de la Cuenta Corriente	4,5	-0,06	-5,7	-8,1	-11,1	-5,1	-6,8	-12,3	-14,6	-12,3	-13,3

2000*: Estimado

Evolución del tipo de cambio real multilateral
1995 = 100

Evolución del tipo de cambio Argentina - Brasil 1994 - 2000



El problema del Empleo en % de la PEA

Gran Buenos Aires

Onda Mayo	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*
Tasa de Actividad	39,2	37,9	39,1	39,5	39,8	41,5	41,1	42,6	41,0	42,1	42,4	42,8	42,4
Empleo	38,3	35,5	35,7	36,8	37,1	37,4	36,7	34,8	34,0	35,3	36,9	35,9	35,9
Desocupación	2,3	6,3	8,6	6,9	6,9	9,9	10,7	18,4	17,1	16,1	13,2	15,4	15,4
Subocupación	4,7	7,5	9,3	2,9	3,0	3,6	4,6	7,0	6,8	6,6	8,2	9,5	9,9

Fuente: EPH

Distribución del Ingreso - GBA

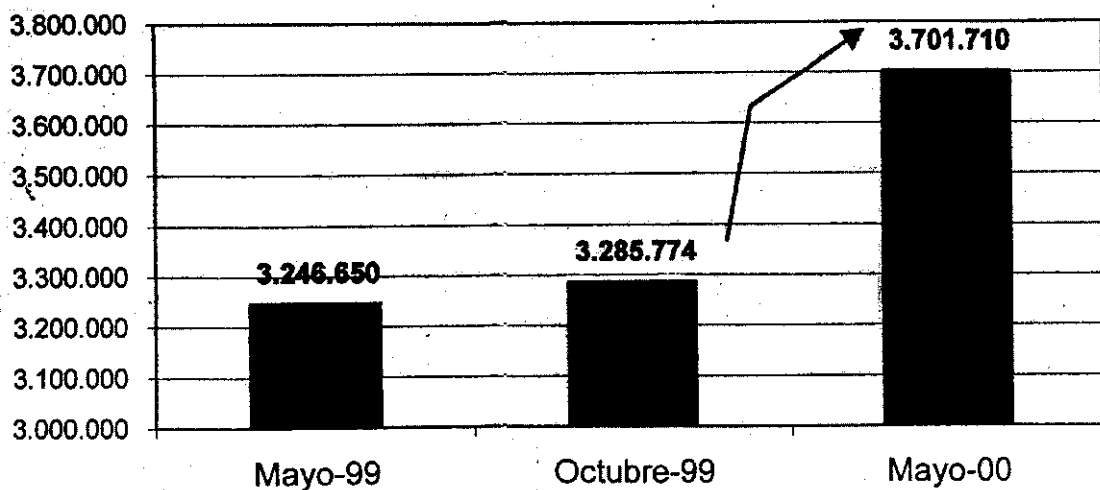
Onda	Deciles - %		
	1-4	5-8	9-10
Oct. 90	14,8	34,5	50,7
Oct. 91	14,5	33,8	51,7
Oct. 92	14,2	35,3	50,5
Oct. 93	19,2	35,2	45,6
Oct. 94	14,2	35,1	50,7
Oct. 95	14,0	35,0	51,0
Oct. 96	13,6	35,5	50,9
Oct. 97	13,6	35,1	51,3
Oct. 98	13,0	34,0	53,0
Oct. 99	12,1	35,5	52,4

Indicador de desigualdad

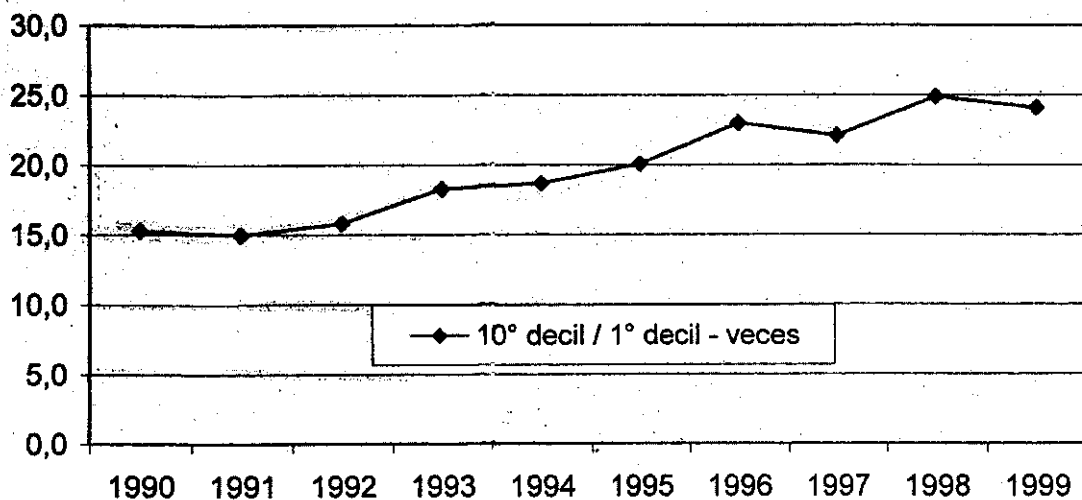
10° decil / 1° decil - veces
15,3
15,0
15,8
18,3
18,7
20,1
23,0
22,1
24,9
24,1

Nota: El 10° decil representa al 10% de mayores ingresos y el 1° decil representa al 10% de los hogares más pobres.

Personas bajo la línea de pobreza GBA



Indicador de seguridad



**Personas por debajo de las líneas de
pobreza e indigencia GBA - en % - Mayo
de cada año.**

	Pobreza	Indigencia
1991	28,8	5,0
1992	19,3	3,3
1993	17,8	3,6
1994	16,1	3,3
1995	22,2	5,7
1996	26,7	6,9
1997	26,3	5,7
1998	24,3	5,3
1999	27,5	8,0
Oct. 99	27,7	7,1
2000	31,0	7,8

Fuente: INDEC

4

Solicitada por el señor senador San Millán

Proyecto de ley de presupuesto

Señor presidente:

El proyecto de ley de presupuesto que hoy venimos a considerar, enuncia como fundamento primordial el estar al servicio de una estrategia de crecimiento. En este sentido, parece que el gobierno nacional empieza a entender, que el crecimiento no se logra a partir de continuos ajustes, sino que, por el contrario, el camino para la consecución de estos objetivos es a través de la reactivación de la economía; alentando la inversión, la producción, el consumo y el comercio exterior que constituyen las bases sólidas que permitirán asegurar dicho crecimiento en el largo plazo.

Debe ser entonces aspiración del gobierno, construir una economía que crezca sostenidamente y que sea competitiva en los mercados mundiales.

Unicamente de ese modo, será viable el incremento de la inversión y el consumo, circunstancias éstas que, necesariamente, traerán aparejada la disminución del desempleo y la reducción de la pobreza y de la exclusión social.

Cabe destacar en este sentido que a partir de algunas reformas propuestas por el propio Ministerio de Economía, se ha puesto énfasis en este proyecto de ley de presupuesto en el fomento de la inversión pública, a través del incremento en los

gastos destinados a planes de empleo, obra pública, programas sociales, etcétera.

Sin embargo, si lo que se busca es alentar el consumo, la inversión y el crecimiento, especialmente en las regiones y sectores más relegados, no resulta adecuado efectuar un ahorro en partidas que estimulan directamente a la producción y, se destinan a provincias que se encuentran postergadas, por ejemplo, en el Fondo Especial del Tabaco se pretende dejar indisponibles aquellos recursos que superen la asignación de ciento ochenta y seis millones ochocientos mil pesos (\$ 186.800.000) contemplada en el artículo 38, los que serán considerados remanentes para el año 2002. Es decir, quedarían inmovilizados alrededor de treinta millones de pesos (\$ 30.000.000).

Medidas de esta naturaleza resultan inadecuadas en una circunstancia en la cual se requiere la inyección de recursos, reitero, tendientes a incrementar la inversión, la producción, las exportaciones y el consumo.

El tabaco rinde al Estado nacional cerca de dos mil millones de pesos en impuestos, doscientos millones de pesos que movilizan las exportaciones y un consumo interno satisfecho en un ciento por ciento. Como podemos observar, esto no sería posible sin la adecuada utilización de los recursos provenientes del Fondo Nacional del Tabaco.

El propósito que persigue el Fondo Especial del Tabaco no es otro que el de equilibrar la comercialización del tabaco en el país o, dicho de otra manera, fortalecer la posición de miles de productores ante un fuerte sector industrial que está concentrado en dos grandes compañías. Todo ello sin descuidar la necesidad de mejorar las técnicas de cultivo, cosecha y acondicionamiento del producto.

La producción y comercialización del tabaco en nuestro país tiene gran trascendencia en las regiones del NOA y NEA. Las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Misiones, Corrientes, Chaco y Catamarca reúnen en su conjunto a más de veinte mil productores y cien mil trabajadores, además del efecto multiplicador que significa para los pobladores regionales la dinamización de la actividad en forma indirecta.

Por las razones expresadas, y porque el país no puede dejar de tener un presupuesto, voy a votar en general afirmativamente. En lo que respecta al tratamiento en particular, voy a votar negativamente el texto de la media sanción venida de Diputados en varios artículos, acompañando las modificaciones y alternativas que formule el bloque al cual pertenezco. Personalmente voy a proponer una modificación del segundo párrafo del artículo 38, referido al Fondo Especial del Tabaco, que está consensuado, además de la bancada Justicialista, con senadores pertenecientes a otras expresiones políticas de este cuerpo.

5

Solicitada por el señor senador Gioja

Señor presidente:

Desde el gobierno nacional, se repite insistentemente que el país está al borde del abismo.

Así se nos exige a los legisladores peronistas que colaboremos con la sanción, en tiempo récord, de un presupuesto que no compartimos.

Y el peronismo, una vez más, va a acompañar, va a poner el hombro.

Si hay que apoyar este proyecto de ley, para que la Alianza no destruya lo que los argentinos conseguimos en una década de transformaciones, lo vamos a hacer.

Pero no nos engañemos. Seamos conscientes del cabal significado del acto legislativo que vamos a producir.

Esta no es la primera vez que nos piden desesperadamente ayuda.

Y como vemos las cosas, seguramente no será la última.

Recordemos —como ya dije en este recinto la semana pasada— que aun antes de asumir el gobierno nacional recurrió a las provincias, porque necesitaba la ayuda de éstas, para comenzar la gestión de gobierno.

Y todas las provincias, incluyendo a las muchas gobernadas por el justicialismo firmaron un nuevo

pacto fiscal, porque se les aseguró que así se garantizaba la gobernabilidad, y que era la herramienta que necesitaban para cumplir las promesas de la campaña electoral.

El Congreso, por su parte, votó a fines del '99 el presupuesto que pedían. Un presupuesto que, según nos quisieron hacer creer, era el que precisábamos para crecer.

En ese entonces, la Alianza estaba en su etapa de fiscalismo ortodoxo y nos decían que era fundamental cumplir con la reciente ley de responsabilidad fiscal, que la herencia recibida, los \$ 7.000 millones de pesos de déficit de ese momento, equivalía, en los hechos, a un país incendiado.

Frente a este diagnóstico tan tremendo, la Alianza aplicó su receta: primero vino el impuestazo y luego el ajustazo.

¿Un año después, cuánto déficit tiene el país? Seguimos en los \$ 7.000 millones de pesos.

¿Y cuánto prevemos para el 2001 en este presupuesto?

Nuevamente, \$ 7.000 millones de pesos.

¿Y la ley de responsabilidad fiscal, que había que respetar "a rajatabla" para que baje el famoso riesgo país y recuperar el sendero de crecimiento?

Parece que ahora nos van a pedir que la retoquemos un poquito.

Cabe preguntarse, por qué se llega a esta situación.

¿El contexto internacional no cambió?

¿Seguimos padeciendo los terribles *shocks* externos que tuvimos que soportar en los dos últimos años de la gestión anterior?

¿Ocurrió algo tan dramático para los países emergentes como la crisis asiática de fines del '97, el *default* de Rusia de 1998 o la devaluación de Brasil de principios del '99?

Nada de eso.

El mundo crece como nunca, arrastrado por esa impresionante locomotora que es la economía estadounidense.

Los países vecinos, sobre todo nuestros principales socios comerciales, Brasil y Chile, tienen una economía en plena expansión.

Pero siempre hay una excepción. Hay dos o tres países en el mundo que no están aprovechando este ciclo económico extremadamente positivo. Uno de esos países es el nuestro.

Tenemos ese raro privilegio.

¿Y quién es para el gobierno nacional el responsable de esta delicada situación?

El peronismo. Ni Asia, ni Rusia, ni Brasil. El peronismo.

Los gobernadores que no saben gobernar, y los senadores que no quieren el blindaje, porque no votan el presupuesto el mismo día que ingresa en la Cámara.

¿Qué hicieron, entonces los gobernadores peronistas?

Acordaron un nuevo pacto fiscal. Un nuevo parche al sistema de coparticipación federal de impuestos. Lo que habían cedido a favor del Tesoro nacional en diciembre del año pasado, ya a la Alianza no le alcanzaba. Y pidieron más. Y los gobernadores, los supuestos culpables del desastre en el que nos encontramos, pusieron nuevamente el hombro.

A esas administraciones supuestamente tan mal manejadas, les vinieron a pedir ayuda. Y nuevamente, encontraron una respuesta positiva.

Unos meses atrás, la Alianza presentó en la Cámara de Diputados el primer proyecto de ley de presupuesto para el año 2001.

En ese entonces, todavía con el traje de fiscalistas ortodoxos, no tuvieron mejor idea que hacer respetar la ley de responsabilidad fiscal, eliminando o reduciendo partidas que les correspondían a las provincias. Tenían que bajar el déficit en \$ 1.200 millones y con una hipótesis de crecimiento de la recaudación de \$ 500 millones (producto de una economía que entonces creían que iba a crecer casi un 4 %) necesitaban reducir el gasto, en por lo menos \$ 700 millones más.

¿Aplicaron entonces un programa de reingeniería del Estado, tal cual habían prometido antes de asumir el gobierno?

¿Eliminaron reparticiones del Estado que se superponen con las responsabilidades que están hoy en las provincias?

¿Analizaron qué se puede cambiar en un presupuesto, de un Ministerio de Educación de la Nación, sin escuelas? ¿O de un Ministerio de Salud sin hospitales?

No.

Preferieron eliminar partidas como el subsidio al gas o a los combustibles en la Patagonia. O el Fondo del Tabaco para el NOA y el NEA. O la Promoción de las Economías Regionales. O los planes de ayuda social en las provincias.

Y ya que estaban, no les sacaban los \$ 700 millones que necesitaban, les querían sacar por lo menos \$ 300 millones más.

Hoy en día, que en la Alianza ya no son más fiscalistas ortodoxos, que en definitiva no saben ya demasiado bien qué son, presentaron "otro presupuesto", totalmente diferente!

Un presupuesto en el que, tener \$ 7.000 millones de pesos de déficit, no está tan mal. En el que, modificar la ley de responsabilidad fiscal no es tan terrible.

Un presupuesto en el que ya no vamos a crecer al 4 % sino al 2,5 %.

En definitiva, un presupuesto que necesita un blindaje, porque con todos estos cambios de rumbo, idas y venidas, es más que lógico creer que nuestros acreedores no deben estar muy tranquilos.

Nosotros creemos, que para recuperar la senda del crecimiento económico, que es lo único que nos va a posibilitar cerrar la brecha fiscal, se necesita otra cosa.

Los problemas de la Argentina son esencialmente políticos; están relacionados con la falta de liderazgo y con anteponer los intereses mezquinos y egoístas de los integrantes de una Alianza que hoy ya no existe, a los intereses de la Nación.

El bloque de senadores justicialistas va a aprobar esta ley de presupuesto 2001, superando diferencias de criterios y trabas reglamentarias, no como respuesta al acoso de la Presidencia, sino porque somos respetuosos del sistema democrático.

La democracia tiene recursos genuinos y eficaces para superar las crisis de gobernabilidad, haciendo funcionar plenamente a sus instituciones.

Sabemos que no es posible gobernar sin presupuesto.

Al aprobar ese instrumento fundamental de gobierno, le reclamamos al presidente De la Rúa que no despilfarre esta nueva oportunidad de gobernar, que retome el poder de iniciativa, que juzgue con severidad la eficacia de sus ministros y que formule, políticas de Estado: desde la oposición vamos a apoyar todo aquello que beneficie al pueblo.

Somos leales a una consigna, que prioriza la patria por encima de los intereses sectoriales y las perspectivas personales.

Hubiésemos preferido analizar puntillosamente y debatir esta ley con espíritu federal.

Hoy sacrificamos en homenaje a la unidad y la gobernabilidad de la Nación esa preferencia.

Advertimos que el año próximo seremos implacables en el celo de custodiar el crecimiento armónico y equilibrado que exige nuestra Constitución federal.

6

Solicitada por el señor senador Agúndez

Señor presidente:

Corresponde, en primer lugar, tal como lo dijo mi colega de bancada —senador Moreau— hacer un expreso reconocimiento a la responsabilidad política de la bancada mayoritaria de este honorable cuerpo, que con su presencia ha permitido el tratamiento y consideración de esta trascendental ley de la República.

Asimismo, la visita del día de la fecha a Olivos, de casi todas las bancadas, más allá de las ironías y peyorizaciones, ha sido vista por la sociedad con alivio porque refleja la responsabilidad y altura política de los legisladores. La circunstancia de entrevista con el ministro y la posibilidad de discusión o de consenso de normas también refleja esa sensación a la sociedad.

Esta misma comprensión, frente a la gravedad de la crisis financiera que atraviesa el país, entende-

mos que se ha evidenciado en la madurez con que el acuerdo federal para el crecimiento ha podido ser firmado entre la Nación y las provincias.

Tratar el presupuesto implica, además de la colaboración de todos, en un marco de responsabilidad y de consenso, la recreación de la confianza entre los argentinos, para lo cual la participación institucional del Parlamento es imprescindible.

A partir de estas premisas, considero necesario aclarar, por las consideraciones que aquí se han vertido, que el presupuesto, es una herramienta de política activa de quien, por expreso mandato constitucional, tiene la responsabilidad de conducir la administración general del Estado, que no es otro que el Poder Ejecutivo nacional, quien tiene el derecho y la responsabilidad de delinear y definir las políticas que llevara adelante, bajo su exclusiva responsabilidad, en su gestión de gobierno.

El presupuesto refleja el perfil político institucional que el gobierno quiere imprimir al país.

Si bien es cierto que el tiempo para el tratamiento y consideración en el Congreso de esta ley de leyes, tal como aquí se ha dicho, por la importancia de la materia, debe ser suficiente para conocer a fondo dicha ley, no es menos cierto que este "tiempo de estudio" está condicionado por la realidad política y social de la difícil coyuntura que nos toca transitar en la actualidad, que nos exige darle el instrumento al gobierno en forma, pero también en el tiempo oportuno que nos marca esa realidad.

Nadie puede, de buena fe, alegar el desconocimiento de las pautas contenidas en el presupuesto que aquí estamos tratando, con el argumento de que hace apenas 22 horas que lo tienen en su poder para su lectura "completa". Este presupuesto, más allá de la formalidad de su ingreso por mesa de entradas de esta Cámara, ha tenido un tratamiento público en todos los medios de prensa del país, a lo que debe agregarse el "intercambio" (entre comillas) de información entre los legisladores, diputados y senadores, del mismo sector o partido, que todos sabemos que se lleva a cabo en forma asidua y recurrente, máxime en un tema de esta naturaleza. Nadie puede hacerse, a esta altura de las circunstancias, el sorprendido por no haber contado con el "tiempo intelectual de estudio".

Muchas veces —por eso no vamos a entrar a analizar datos numéricos— se ha descrito el tema de la deuda social, que se trasladaba hacia el nuevo gobierno. Esto se expresaba en las cifras por todos conocidas, relativas a las dificultades de empleo y de argentinos por debajo de la línea de pobreza. Eso imponía al nuevo gobierno actuar simultáneamente en tres flancos:

1. La brecha fiscal;
2. La brecha productiva; y
3. —la brecha social—, pero entre ellas había que fijar alguna prioridad y el gobierno actual, con sus errores y acierto, a través de este

proyecto de presupuesto intenta determinar las prioridades que produzcan una paulatina reactivación de la alicaída economía nacional.

La salida del estado de recesión —ésa era la apuesta inicial del gobierno— dada por un número de proyectos y un conjunto de medidas activas destinadas a mejorar la rentabilidad del sector productivo, que pudieran comenzar a ejecutarse movilizándolo la inversión y constituyendo a ésta, junto con las exportaciones, en el motor de la economía.

Debemos tener presente que en el mes de mayo la Argentina perdió en semanas el esfuerzo realizado desde la asunción del gobierno para ganar el riesgo país. En medio de este escenario se debió lanzar un paquete de medidas muy duras tendientes a mostrar la solvencia fiscal del Estado, reduciendo el gasto del Estado nacional.

En octubre, al aumento del riesgo emergente se debieron sumar las dificultades provenientes del ámbito interno de la Argentina y de los ruidos políticos de la coalición gobernante (salida del vicepresidente) y fuera de ella.

La madurez y responsabilidad de toda la clase política para superar esta coyuntura grave, se vio reflejada, en esta ocasión, en el acuerdo celebrado entre la Nación y las provincias, por el cual, en un hecho histórico, se fija el gasto primario y se establecen los montos de transferencias por cinco años.

Importancia del presupuesto

El nuevo proyecto muestra un déficit de 6.500 millones de pesos base caja y añade aumentos en los gastos destinados a planes sociales y obras de infraestructura por más de quinientos millones de pesos.

Por otro lado, el flujo de medidas apunta a impulsar la construcción en primer lugar a través de la obra privada. Por tal motivo se otorgan incentivos directos a quienes contraigan créditos hipotecarios, como la posibilidad de desgravar del impuesto a las ganancias la cuota del préstamo hipotecario para la compra de una vivienda única hasta 4.000 pesos por año o el seguro de desempleo para el tomador de crédito, es decir, el seguro voluntario negociado por los bancos.

También se impulsa la construcción a través de la obra pública con la promoción del Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura, que no necesita explicación porque la Cámara ya lo votó la semana pasada pero que incorpora obras que en conjunto pueden significar una motorización de obra pública de casi 2.400 millones de pesos en el año 2001.

En las modificaciones del proyecto de presupuesto se propone una ampliación de partidas por sobre las originales que incluyen un relanzamiento agresivo del Programa de Emergencia por las Inundaciones parcialmente financiado por el BID —Pro-

grama 1.118—, por un monto que supera los 100 millones de pesos.

Asimismo, se refuerza la partida de la Dirección Nacional de Vialidad, a lo que se suma el impulso a la vivienda mediante un plan que demandará inversiones por 2.000 millones en los próximos años y que permitirá la construcción de 100.000 nuevas viviendas con mecanismos alternativos y complementarios al FONAVI a través de un fondo fiduciario con la participación del Banco Nación y de los bancos privados con acuerdos ya firmados entre el gobierno nacional y nueve provincias.

Por otro lado, se han firmado acuerdos con empresas concesionarias de servicios públicos privatizados para motorizar inversiones. Así, en el área de las empresas concesionarias de autopistas hay inversiones cercanas a los 1.300 millones de pesos, de los cuales 450 millones deben ejecutarse entre lo que resta de este año y el próximo. También existen nuevos planes de inversión que se encuentran en vías de negociación con Aguas Argentinas y los concesionados de servicios ferroviarios.

Así se va despejando el escenario: sumado al esfuerzo y a la cuota de confianza que necesitamos para volver a crecer a tasas razonables, el contexto internacional que se proyecta no es malo.

El ordenamiento fiscal también permitirá al Estado profundizar su política activa, proseguir su accionar en materia de reducción de impuestos —como se pone de manifiesto en el articulado de este presupuesto— y asumir una vocación más firme en relación con la evasión impositiva a fin de obtener una recaudación que esté por encima de la tendencia de crecimiento y que se deba estrictamente a un triunfo en la lucha contra la evasión. Esto último también contribuirá a que continuemos por el sendero del descenso de impuestos.

Este es un presupuesto diferente al de otros años. Es un presupuesto que a pesar de la crisis no ha recurrido al mecanismo tradicional de llevarse unos puntos más del IVA; al revés. Analizamos si podemos bajar algunos impuestos, si podemos racionalizar el gasto, si podemos distribuir más adecuadamente las partidas y de esta manera salir.

Seguramente aquí vamos a escuchar decenas de requerimientos que no podrán ser atendidos, porque la esencia del presupuesto es la de distribuir aquí y ahora, con recursos finitos gota a gota.

Sin embargo, la acción del Parlamento ha logrado reincorporar el subsidio al gas patagónico al nivel del año pasado.

Respecto del Fondo del Tabaco se ha logrado incrementar su monto en 57 millones de pesos con respecto al proyecto original que se había enviado a esta Cámara, logrando recuperar el mismo nivel presupuestado para el 2000, que era de 186.800.000 pesos, sin perjuicio de la obligación que tiene el Poder Ejecutivo de remitir un proyecto de ley para actualizar el funcionamiento de ese fondo.

Se ha desconcentrado lo que el proyecto de ley concentraba en lo referente al presupuesto universitario, para distribuirlo por programas objetivos. Se trataba del 20 por ciento del presupuesto. Además, en el proyecto original tampoco se financiaba el PROCAP ni el PROUM, y se reservaba a la Secretaría de Política Universitaria 30 millones de pesos para definir políticas públicas.

Se ha hecho un esfuerzo sin precedentes en relación con las universidades. Se ha devuelto la concentración del 20 por ciento del presupuesto de la universidad; se ha redistribuido la asignación de la Secretaría de políticas universitarias, lo que permitirá que la universidad tenga el mismo presupuesto que en el 2000.

Se prorroga el crédito fiscal de la ley pymes, que no estaba contenido en el presupuesto original, fijándose un cupo con lo que se refuerzan los datos de la Secretaría Pyme para el 2001.

Se autorizan cinco millones de pensiones asistenciales nuevas, sin el recaudo que tenían las demás de esperar que falleciera el beneficiario para otorgar una nueva. De esta manera, aunque sea en parte, se va a absorber la gran cantidad de reclamos existentes en este aspecto.

En ese sentido, el Congreso está dando una muestra de responsabilidad, sometiendo a un régimen de recálculo, con severas condiciones de incompatibilidad y de límites en el monto, a las pensiones no contributivas que ha otorgado durante estos últimos años, vencidas y también sin vencer.

Se ha hecho todo esto pensando que existe un esfuerzo singular que hacer, y que debe iniciarse por la política, motivo por el cual este Congreso de la Nación es la repartición del Estado más afectada por los recortes presupuestarios. Ponemos esto sobre el tapete porque es la única manera de mostrar que, efectivamente, estamos dispuestos a compartir el esfuerzo que exigimos a los demás, o sea, a empezar por casa. Como se ha mencionado en alguna discusión presupuestaria, de otro modo no es posible exigir de los demás un esfuerzo para acompañar lo que la Nación tiene que hacer.

Situación del PAMI

El PAMI estaba incluido dentro del proyecto de ley de presupuesto, tal como sucedió en ocasiones anteriores. Sucede que se produjo una larga discusión, luego de la cual se arribó a una conclusión: sacar al PAMI del proyecto de ley de presupuesto y garantizar que el esfuerzo de la Secretaría de Hacienda nivele el descenso de ingresos que se producirá por el recálculo de la pauta de ingresos que también afecta a esa institución. Por eso se contempla un monto de 120 millones de pesos de aportes del Tesoro, de los cuales 40 corresponden a ese recálculo y el resto a la atención de los intereses de la deuda del PAMI, que es refinanciada y consolidada.

Excluir al PAMI del proyecto de ley de presupuesto no significa desconocer que hay un debate de

fondo con argumentos de uno y otro lado. De un lado se dirá que es la obra social de los jubilados y se citará un extraordinario dictamen de Lino Palacios cuando era procurador y diversos fallos de la Corte. Por otro lado se argumentará que ésta no es una obra social cualquiera, porque maneja recursos no sólo de sus usuarios sino de los trabajadores en general. Es decir, a diferencia del resto de las obras sociales, el aporte comprende a quienes podremos ser o no futuros usuarios.

El Estado debe intervenir cuando una obra social tiene un nivel de gastos que impacta y puede producir eventuales dificultades a las finanzas del Estado, y cuando por defecto de administración u otras circunstancias hay que hacer frente a una deuda acumulada que no se puede atender con los recursos propios. De allí la sujeción a un sistema de control, de transparencia presupuestaria, de ejecución y toma de crédito, de nivel de empleo y de información al gobierno y al Congreso de la Nación, a fin de tener la certeza de que se está achicando la brecha. Esto no se debe a que pensamos mal de los funcionarios. Como decía Moreno, los argentinos no podemos conformarnos con que los funcionarios obren bien. Tenemos que hacer todo lo posible para impedir que obren mal.

Reforma del Estado

Otro artículo fuertemente discutido es el referido a la reforma del Estado. Se realizaron todos los ajustes tendientes a despejar la duda de que aquí se estuvieren introduciendo desvíos de manera solapada, por mecanismos no autorizados, para reestructurar leyes laborales o convenios—incluso internacionales—en vigencia, y a brindar garantías acerca de cuál es el mecanismo de discusión, a efectos de lograr más eficiencia en el seno del Estado. Mantener el sistema de premios y de incentivos es el único modo de llegar a recuperar un Estado eficiente y cumplir con algún mínimo de justicia con los empleados del sector público, retribuyéndoles—y devolviéndoles en algunos casos—niveles salariales que han perdido, recortes que han sufrido o beneficios que aspiraron tener.

Desde luego, en el presupuesto está incluido el resultado del acuerdo federal, como los 102 millones de pesos de la garantía del FONAVI; o los 225 millones de pesos que durante el año 2001 se transferirán con destino a planes sociales y de empleo en las provincias.

El programa BID 1.118, de emergencia por inundaciones, obtiene un incremento de 67,7 millones de pesos, de modo que su monto global llega a 109,7 millones de pesos y garantiza la ejecución de todas las obras que estaban incluidas en el programa y con comienzo de ejecución.

Vialidad Nacional

El presupuesto de Vialidad Nacional se ha reforzado, asignándose 2,7 millones de pesos para la Se-

cretaría de Recursos Hídricos; 47,8 millones para garantizar las obras del acuerdo que se acaba de firmar en materia de prestación de servicios públicos y de corredores viales y 32 millones de pesos a partir de la reforma que introduciremos al artículo 29.

Para la autopista Rosario-Córdoba se agregaron 20 millones de pesos más y también se incorporaron 5 millones de pesos en concepto de subsidio para el subterráneo de la Línea A, que no tenía prevista ninguna partida.

Se destinaron 45 millones de pesos a la asignación no prevista de La Rioja y otros 40 millones de pesos para cubrir la transferencia de las cajas de previsión de las provincias que aún la adeudan, conforme surge del acuerdo federal.

Se incluyeron 50 millones de pesos para el nuevo sistema de incentivos regionales cuya ley deberá sancionarse y se incorporó un aporte de 8 millones de pesos para Aerolíneas Argentinas, que no estaba previsto y que ha comprometido el Estado en la renegociación reciente.

Asimismo, al Programa Social Agropecuario, que contaba con un presupuesto de 1,8 millones de pesos, se le agregaron 5,7 millones de pesos, de modo que pasó a tener un presupuesto de 7,5 millones de pesos. Pero, además, se incorporaron 3 millones de pesos al Programa Cambio Rural y Proinder permanece con 5 millones de pesos, de modo que la suma de los tres programas agropecuarios supera los 15 millones de pesos.

También se agrega un refuerzo de 3 millones de pesos al Programa Materno-Infantil del Ministerio de Salud. Asimismo, el Propasa, que es un programa destinado a obras de infraestructura social en poblaciones menores de 500 habitantes, recibe un incremento presupuestario de 10 millones de pesos.

El Programa Redes, sobre microemprendimientos, también se refuerza con un incremento de 3 millones de pesos y el Programa Solidaridad, que es el más importante del Ministerio de Desarrollo Social para luchar contra la pobreza, ha recibido un refuerzo de 15 millones de pesos.

Las becas del Ministerio de Desarrollo Social también recibieron un incremento de 1,3 millones de pesos y el Programa de Mejoramiento Barrial, que tenía asignada una partida de 11 millones de pesos, recibe un incremento de 1,5 millones de pesos.

El Programa de Gestión de la Contaminación recibe un aumento de 1,5 millones de pesos; el presupuesto para el Censo Nacional de Población se incrementó en 5 millones de pesos y se renegociaron salarios para concretarlo el año próximo.

Asimismo, se asignó a la Federación Argentina de Municipios un valor simbólico de 100 mil pesos, cifra que en definitiva es importante porque significa reconocer la tarea de los municipios.

Como se advierte y a diferencia de otros presupuestos, en éste no hay cifras multimillonarias ni

asignaciones para fundaciones. En este sentido, no es cierto lo que he escuchado acerca de que se habían fijado partidas por 200 millones de pesos para las fundaciones y que había miles de millones de pesos destinados a auditorías externas o contables. Todo eso se ha restringido en este presupuesto.

En definitiva estamos haciendo una apuesta difícil al futuro y a la fe, pero también al trabajo de los argentinos. Se trata de un planteo de responsabilidad política que no se agota en el tratamiento del presupuesto de la Nación. Además, significa el compromiso del Congreso para poder resolver esta cuestión, porque lo que muchas veces se pone en duda, en el marco de las responsabilidades políticas, aun dentro del disenso, son las reformas estructurales

que la economía argentina necesita, cuyo primer paso considero que comenzamos a recorrer a partir del tratamiento y aprobación de este presupuesto.

Resulta, en consecuencia, como dijo mi correligionario Baglini, de una apuesta que nos exige un esfuerzo —aun desde la divergencia de opiniones— para respaldar un presupuesto que hoy la Argentina necesita, a fin de mostrar al mundo que efectivamente es un país digno de la confianza del crédito internacional y del apoyo necesario para paliar las dificultades financieras que han sumido a la economía argentina en una de las más graves crisis de su historia.

Jorge A. Agúndez.